



Noticiero IMER 03 de junio de 2020

COVID 19 y la crisis del Estado.

Es necesario reconocer que además de una crisis sanitaria, una crisis económica que destruirá miles de empresas y una crisis social con aumentos en la pobreza y el desempleo de millones de mexicanos, la pandemia destapó una crisis del Estado.

La desigualdad en el acceso, la insuficiencia, el deterioro, la desarticulación y la baja calidad de los servicios de salud pública que se ha evidenciado de manera muy clara en México, es sólo una muestra del gravísimo deterioro, destrucción e insuficiencia de las capacidades del Estado mexicano para cumplir sus funciones de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de la población del país.

Si uno trata de revisar y enlistar todas las intervenciones que consideramos deberían estar haciendo el gobierno federal y los estatales frente a la crisis sanitaria, llegaríamos a la conclusión de lo pequeñas y destruidas que se encuentran las capacidades del Estado para responder a la magnitud y complejidad de los déficits económicos, sociales, ambientales y políticos que se han hecho evidentes con la pandemia: poblaciones sin acceso a agua, problemas de obesidad y diabetes por la deficiente alimentación, grupos particularmente vulnerables como son los migrantes, las personas desplazadas y las poblaciones callejeras, condiciones de alto riesgo en asilos, orfanatorios o reclusorios, aumento de la violencia criminal, violencia común y violencia doméstica, son sólo algunos ejemplos.

Si bien el origen de la destrucción de capacidades del Estado fue el periodo de regímenes neoliberales en donde se privilegió al mercado y se minimizó al Estado, las medidas actuales de austeridad que castigan con decisiones generalizadoras los residuos del Estado que aún tenemos, han contribuido a acelerar el deterioro.

Esto determina que las propuestas de intervención del Estado Mexicano para proteger la planta productiva y los empleos, o para atender y proteger a las poblaciones migrantes o desplazadas, o para frenar la violencia contra las mujeres no puedan llevarse a cabo. Si bien en parte ello se origina en decisiones de tipo político, también ocurre porque la Administración Pública Federal no cuenta con los recursos financieros, ni con el personal suficiente y capacitado, ni con infraestructura, ni equipamiento, ni suministros para poner en práctica las medidas necesarias. Lamentablemente, también desde hace varios años perdió la capacidad de diseñar políticas y programas de gobierno pertinentes a la complejidad social que además fueran consensadas con la población.

Con la crisis sanitaria se han hecho evidentes las omisiones, los errores y la corrupción en medidas de política y en programas gubernamentales que se tomaron en el pasado de manera autoritaria sin consultar a la población y muchas veces respondiendo sólo a los intereses de la élite. El ejemplo más conspicuo es el aliento a la urbanización acelerada y sin planeación alguna y el apoyo al capital inmobiliario de las últimas tres administraciones.

Un ejemplo tomado de un excelente documento elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico llamado Reflexiones COVID 19, que se puede consultar en el portal del Foro nos dice:

“Desafortunadamente, millones de personas en todo el país, están pasando la cuarentena en hacinamiento, porque un porcentaje de las viviendas fueron construidas para parejas o familias con un hijo, pero son habitadas por las llamadas “familias extendidas” que la conforman el abuelo, los suegros o los padres, un cuñado, hermanos (Rodríguez, 2020).

Durante la cuarentena vivir en hacinamiento es un problema de salud pública y de salud mental. Existe una gran dificultad de convivencia que puede detonar la violencia hacia mujeres y niños, abandono de adultos mayores, angustia, ansiedad y depresión, entre otros escenarios.

En zonas como la Ciudad de México hay familias de más de cuatro integrantes que viven en un departamento de interés social de 34 metros cuadrados con una sola recámara”.

El gran desarrollo inmobiliario desde el año 2000, con el gobierno de Fox, que cambio la fisonomía de nuestras ciudades, nos ha dejado un lastre de viviendas mínimas de interés social que están en la base de los graves problemas de salud mental que han explotado con el encerramiento social.

La evidencia en los doce países que han tenido éxito para enfrentar la pandemia, es que cuentan con capacidades de estado para llevar a cabo las decisiones que se toman y que como Ángela Merkel, han echado mano de todos los recursos sociales con una convocatoria amplia a los gobiernos estatales, municipales, a las empresas, a los centros de investigación y universidades y a la sociedad civil. Por cierto, siete de ellos son presididos por mujeres.